

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

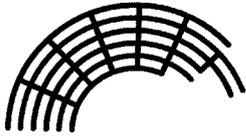
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, las diputadas abajo firmantes de En Comú Podem (Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos – En Comú Podem – En Marea) formulan las siguientes **preguntas escritas** dirigidas al Gobierno, para su respuesta escrita:

El Estado español, a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, está financiando en Honduras parte de la construcción del aeropuerto de Palmerola. Ello se vehicula mediante un programa de conversión de deuda que el país centroamericano tiene con España. En palabras del embajador español en Tegucigalpa, Guillermo Kirkpatrick, el aeropuerto de Palmerola es uno de los proyectos “emblemáticos” para el Gobierno del Reino de España en Honduras.

Dicho proyecto incluye también la ampliación del aeropuerto internacional de la isla de Roatán, en el Caribe, y la construcción de otros aeródromos para aeronaves pequeñas en el occidente, sur y oriente del país. Todo ello con el objetivo de promover el turismo. En total, la aportación de España se cifra en unos 52 millones de dólares.

Según fuentes periodísticas, el Gobierno de Honduras habría firmado un contrato de concesión del Aeropuerto Internacional de Palmerola con la empresa EMCO Mining Company, propiedad del Sr. Lenir Pérez y la Sra. Ana Facussé, dedicada a la construcción y la metalurgia y con sede en San Pedro Sula y representación en algunos países centroamericanos, especialmente en Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Dicha empresa fue la única que materializó oferta de licitación para el proyecto Palmerola y, aunque en su momento se presentó como una firma alemana con experiencia en la construcción de aeropuertos, se ha hecho público que en realidad había tan sólo subcontratado la supervisión de una empresa alemana para justificar el contrato con el grupo que preside.

La financiación de EMCO para asumir el proyecto, valorada en unos 87 millones de dólares, según declaraciones del ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Sr.

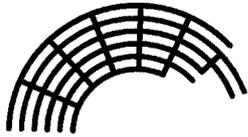


Roberto Ordoñez, parten del propio gobierno de Honduras y una supuesta donación del Reino de España.

Sobe EMCO y otras las empresas del grupo dedicadas a la inversión en minería (Alutech y Minerales Victoria), propiedad también del Sr. Pérez, pesan graves acusaciones de intimidaciones, hostigamiento, acoso y ataques a la integridad contra una veintena de líderes, sacerdotes y defensores de los derechos humanos de la comunidad de Nueva Esperanza y del Patronato Regional del Sector Florida, ubicadas en el departamento de Atlántida. Dichas acciones fueron denunciadas por el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y el Movimiento Ambientalista de Atlántida (MAA), que están brindando apoyo a La Nueva Esperanza y a las demás comunidades cercanas que están siendo afectadas por el proyecto, y señalan “una escalada alarmante de intimidaciones” desde el inicio del año 2013, especialmente por parte del empresario Lenir Pérez y de policías y civiles armados que lo apoyan. A raíz de todo ello, las comunidades, acompañadas por otras organizaciones, presentaron ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos CIDH una solicitud de medidas cautelares para que requiriera al Estado de Honduras a fin de proteger la vida e integridad personal de varios líderes, defensores y defensoras de derechos humanos de la comunidad Nueva Esperanza y del Patronato Regional del Sector Florida. Tras analizar los hechos denunciados, la CIDH consideró que estas personas se encontraban en una situación de gravedad y urgencia puesto que su vida e integridad estaban amenazadas y en grave riesgo. Todo ello ha sido verificado y denunciado por los observadores internacionales del Proyecto de Acompañamiento Internacional en Honduras (PROAH), dedicado al acompañamiento físico a defensores y defensoras de derechos humanos de Honduras.

¿Ha brindado el Gobierno de España algún tipo de apoyo al proyecto de ampliación del aeropuerto de Palmerola? ¿Tiene o ha tenido el Gobierno de España alguna participación en el desarrollo del mismo?

¿Qué relación mantiene el Estado español con la empresa Palmerola International Airport, S.A., concesionaria de dicho aeropuerto? ¿Son ciertas las afirmaciones que el Estado español ha hecho una donación a dicha empresa a fin de ayudarla financieramente en la asunción del proyecto? ¿Ha realizado el Reino de España algún tipo de gestión diplomática para facilitar la concesión del proyecto?



¿Es conocedor el Gobierno de España de las denuncias por agresiones a líderes de comunidades y a defensoras de derechos humanos que pesan sobre el Sr. Lenir Pérez, presidente de Palmerola International Airport, y su grupo de empresas?

¿Qué actuaciones está desarrollando el Estado español en Honduras para velar por la seguridad e integridad de líderes comunitarios y defensoras de Derechos Humanos y para evitar la impunidad de agresores?

Palacio del Congreso de los Diputados

Madrid, 17 de julio de 2018

Jaume Moya i Matas

Diputado

Aina Vidal Sáez

Diputada